



*Asesorías y Tutorías para la Investigación Científica en la Educación Puig-Salabarría S.C.
José María Pino Suárez 400-2 esq a Lerdo de Tejada, Toluca, Estado de México. 7223898475*

RFC: AT1120618V12

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.

<http://www.dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/>

Año: XII

Número: Edición Especial

Artículo no.:64

Período: Diciembre del 2024

TÍTULO: Influencia de la gobernanza en la participación social de las comunidades rurales en Ecuador: Estrategias para el Desarrollo Sostenible y la Inclusión.

AUTORES:

1. Abg. Arhon Joel Onofre Arboleda.
2. Abg. Dayse Margarita Perero Morales.
3. Máster. María José Alvear Calderón.

RESUMEN: La investigación aborda cómo las estructuras y políticas de gobernanza afectan la capacidad de las comunidades rurales para participar en los procesos de toma de decisiones y desarrollo local. El objetivo principal es analizar estos impactos y proponer mecanismos efectivos para mejorar la inclusión y la efectividad de estas comunidades dentro de los marcos de gobernanza existentes. La metodología es cualitativa, utilizando análisis de documentos. Los resultados revelan, que aunque hay esfuerzos legislativos y políticos para mejorar la participación de las comunidades rurales en la gobernanza, aún persisten desafíos significativos. La investigación demuestra que mejorar la participación de las comunidades rurales en la gobernanza es crucial para el desarrollo sostenible y la equidad en Ecuador.

PALABRAS CLAVES: gobernanza participativa, desarrollo rural, inclusión social, comunidades rurales, políticas públicas.

TITLE: Influence of governance on the social participation of rural communities in Ecuador: strategies for sustainable development and inclusion.

AUTHORS:

1. Atty. Arhon Joel Onofre Arboleda.
2. Atty. Dayse Margarita Perero Morales.
3. Master. María José Alvear Calderón.

ABSTRACT: The research addresses how governance structures and policies affect the ability of rural communities to participate in local development and decision-making processes. The main objective is to analyze these impacts and propose effective mechanisms to improve the inclusion and effectiveness of these communities within existing governance frameworks. The methodology is qualitative, using document analysis. The results reveal that although there are legislative and political efforts to improve the participation of rural communities in governance, significant challenges still remain. Research shows that improving the participation of rural communities in governance is crucial for sustainable development and equity in Ecuador.

KEY WORDS: participatory governance, rural development, social inclusion, rural communities, public policies.

INTRODUCCIÓN.

Al abordar los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, se hace referencia al ámbito político, el cual comprende las instituciones, los mecanismos y las formas mediante las cuales se toman decisiones que tienen el poder de moldear, limitar, expandir o restringir las perspectivas de futuro (Zulfa & Septiviastuti, 2019). Esta esfera de la vida humana encierra aspectos de coexistencia y colaboración, así como también enfrentamientos y divergencias.

La Carta Magna ecuatoriana ha emergido como un instrumento crucial, instaurando una era de preponderancia para el poder del pueblo; no obstante, debido a la autonomía política, administrativa y financiera otorgada, la conducta de los gobiernos locales presenta una diversidad notable en comparación con el ritmo y las políticas a nivel nacional ecuatoriano (García & Benítez, 2023).

Desde la promulgación de la Constitución de 2008 en Ecuador, seguida por la implementación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en 2010, junto con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COFP), ambos también del 2010, se han iniciado varios procesos de descentralización a nivel regional (Calvo & Fernández, 2021). Estos movimientos han tenido un impacto significativo en la manera en que la ciudadanía participa dentro de los diversos gobiernos subnacionales, adaptándose a las especificidades territoriales de cada región.

La gobernanza y la participación social en el Ecuador rural representan dos ejes fundamentales del desarrollo sostenible y la democratización de los espacios rurales. En el contexto ecuatoriano, las áreas rurales enfrentan desafíos únicos debido a la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica, lo que requiere enfoques de gestión innovadores y participativos. Promover políticas inclusivas que fomenten la participación activa de las comunidades rurales en los procesos de toma de decisiones es fundamental para satisfacer sus necesidades específicas y garantizar un desarrollo equitativo (Lucky, 2022).

En las últimas décadas, Ecuador ha experimentado una serie de cambios políticos y legales que han redefinido la relación entre Estado, sociedad y territorio, con especial énfasis en las zonas rurales (Basri et al., 2021). La Constitución del 2008, con disposiciones como el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), sentó las bases para una nueva forma de gobierno en la que la participación popular y la descentralización desempeñan un papel protagónico; sin embargo, la implementación efectiva de este marco legal para promover la participación real y efectiva de las comunidades rurales en la gestión de recursos y el trazado de vías de desarrollo aún enfrenta muchos desafíos (Adesida, 2015).

Comprender la interacción entre la gobernanza y la participación comunitaria en el Ecuador rural es importante no sólo para evaluar el impacto de las políticas públicas actuales sino también para identificar oportunidades y barreras para un desarrollo rural más integral y sostenible (Brown & Wocha, 2017).

Este análisis nos permitirá proponer estrategias para mejorar la capacidad de las comunidades rurales para influir en las decisiones que afectan sus vidas, fortaleciendo así su papel en la construcción de un Ecuador más equitativo y diverso.

El impacto de la gobernanza en la participación pública de las comunidades rurales es fundamental para comprender cómo se pueden mejorar los procesos democráticos y de desarrollo en contextos rurales. Este análisis muestra que una gobernanza participativa eficaz es clave no sólo para empoderar a las comunidades rurales sino también para el desarrollo sostenible y equitativo en estas regiones (Kimengsi & Balgah, 2016). La descentralización, el desarrollo de capacidades locales, y la participación de todas las voces, especialmente de los grupos marginados, son elementos importantes que deben integrarse cuidadosamente en las políticas públicas.

Ante lo expuesto, el objetivo general de la investigación es analizar cómo la gobernanza influye en la participación social de las comunidades rurales, con el fin de identificar mecanismos efectivos que potencien su inclusión en los procesos de toma de decisiones y desarrollo local (Siwi & Indriyati, 2019).

DESARROLLO.

Gobernanza ecuatoriana.

Gobernanza en Ecuador se refiere al sistema de procesos y estructuras a través de los cuales se organiza, dirige y controla la administración pública y las interacciones entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado en Ecuador (Hasan & Muhammad, 2024). Este concepto va más allá de la simple gobernanza y se centra en la capacidad del Estado para cooperar con estos actores para lograr objetivos comunes de desarrollo sostenible y bienestar social.

La Constitución de la República del Ecuador, ratificada en el año 2008, contiene varias disposiciones que establecen principios de gobernanza, así como en el Artículo 83. Los artículos 6 y 7 promueven la participación ciudadana como obligación y derecho, enfatizando la importancia de la cooperación de la sociedad con el Estado para el desarrollo nacional (Masharipov, 2023). Asimismo, el art. 204 garantiza

el derecho a participar en la administración pública a través de mecanismos como la consulta pública y asambleas ciudadanas, estableciendo así una gobernanza participativa. Estas disposiciones constitucionales reflejan el compromiso del país con un modelo de gobernanza que se esfuerza por ser inclusivo y representativo de todas las voces del país.

En el contexto ecuatoriano, la gobernanza también se centra en la descentralización y la autonomía entre jurisdicciones y niveles de gobierno (Dinatul & Azizatul, 2022). Según el Art. 238 de la Constitución, el Ecuador se declara una nación unitaria, pluricultural y multinacional, organizada territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, cada una con un grado de autonomía, cierto dominio político, administrativo y financiero. El objetivo de esta estructura es asegurar una gestión eficaz para satisfacer las necesidades locales, promoviendo un desarrollo sostenible y armonioso en todo el país (Vasstrøm & Normann, 2019).

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) de Ecuador es el marco legal básico que establece mecanismos y procedimientos para garantizar y promover el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del país. Esta Ley refleja el compromiso del Gobierno de democratizar la vida pública y fomentar una sociedad más inclusiva y vibrante (Patyka et al., 2021). A través de esta ley se busca incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones, el control social de la administración pública, y el desarrollo de políticas que satisfagan las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

LOPC ofrece una variedad de mecanismos de participación directa e indirecta, que incluyen, entre otros, consultas públicas, referendos, iniciativas legislativas ciudadanas, asambleas públicas abiertas y consejos de participación ciudadana de incorporación (Nurkomala et al., 2023). Estas herramientas son la base para desarrollar una cultura de diálogo y cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, permitiendo a las personas influir directamente en la formulación, implementación y evaluación de

políticas públicas. Además, la ley promueve la transparencia y la rendición de cuentas, elementos clave de una gobernanza eficaz y ética.

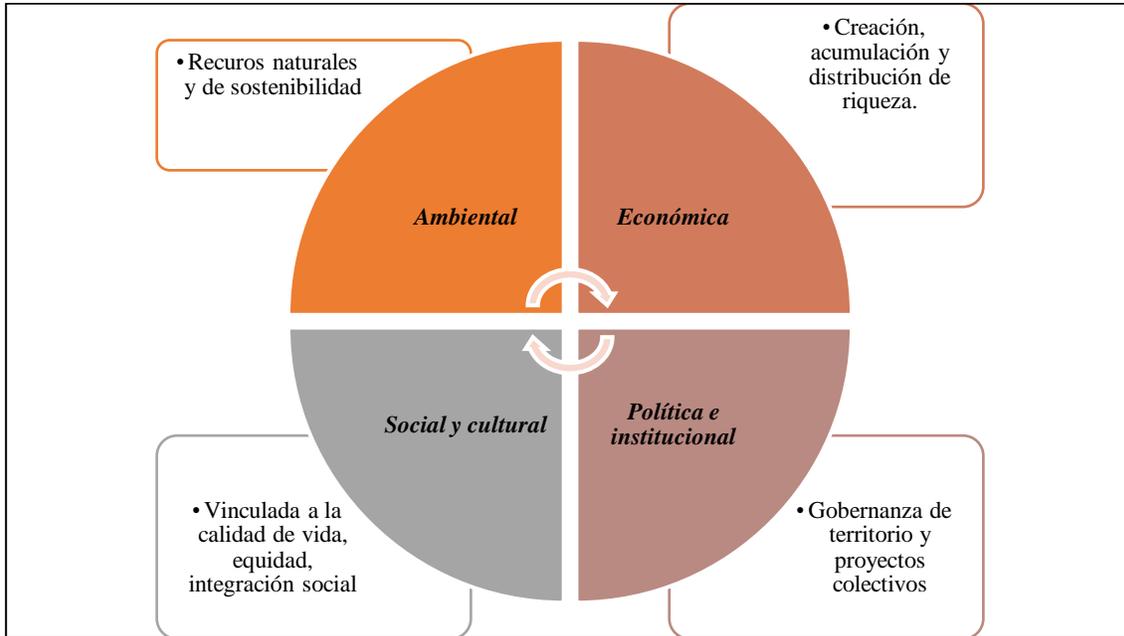
Territorio como construcción social.

El proceso de descentralización, ampliamente aceptado en todo el subcontinente, tuvo como objetivo principal el desarrollo general de un nuevo concepto de territorio. Este enfoque pretende identificar áreas territoriales con base en criterios de sostenibilidad y rentabilidad, teniendo en cuenta los recursos naturales (Nahar & Khurana, 2020), el potencial productivo, los actores sociales, las estructuras institucionales y su integración al contexto global. Al introducir el concepto de territorio y su organización, la descentralización plantea serios desafíos: primero, adoptar una perspectiva territorial amplia; en segundo lugar, crear herramientas efectivas para controlar y gestionar el territorio; y tercero, implementar estrategias orientadas al desarrollo territorial (Espinosa, 2023).

Esta reorientación hacia la descentralización requiere un enfoque integral que no sólo reconozca la diversidad y el potencial único de cada territorio, sino que también incluya la creación y aplicación de un marco de gobernanza que respalde la gestión eficaz de los territorios. Implica pasar de métodos de gestión tradicionales a modelos que valoren la participación activa de las comunidades locales en el diseño e implementación de planes de desarrollo que reflejen las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, asegurando así un desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo (García & García, 2021).

La base para un mayor desarrollo es el desarrollo de una comprensión multiperspectiva del territorio, reconociendo la diversidad de sus elementos constitutivos (Guerrero et al., 2023). A continuación, se va a detallar los componentes para medir el desarrollo de las ruralidades:

Figura 1. Componentes para medir el desarrollo de las ruralidades.



Territorio y ruralidad.

Un enfoque de desarrollo rural integrado con una estrategia de desarrollo territorial local o regional representa un cambio fundamental en comparación con los conceptos tradicionales de áreas rurales (Barón et al., 2019). Se aleja de una perspectiva industrial que la asocia únicamente con la economía agrícola, una visión ampliamente respaldada por organizaciones como el Departamento de Agricultura, instituciones crediticias y programas de innovación de tecnología agrícola.

Además, va más allá de la definición demográfica que contrasta el campo con la ciudad, definiendo el campo simplemente como áreas con baja densidad de población y una visión social que las ve como el hogar de los pobres y marginados de la sociedad. Este enfoque tradicional ha dado lugar a políticas, que por un lado, promueven la integración del mercado internacional y crean condiciones favorables para sectores agrícolas competitivos, y por el otro, implementan medidas de desarrollo rural basadas en la seguridad social y la falta de coordinación y reducción de pobreza; no existe una conexión real con las necesidades y contextos locales (Guarnizo & Riveros, 2024).

El avance hacia un desarrollo rural más integrado y basado en el lugar tiene como objetivo corregir estos enfoques fragmentados, promoviendo una visión holística que reconozca la complejidad y el potencial únicos de las zonas rurales dentro de un marco económico, social y ambiental más amplio.

Metodología.

Enfoque cualitativo.

Se eligió un enfoque cualitativo para la investigación debido a su capacidad para explorar en profundidad las percepciones, experiencias y dinámicas sociales complejas que caracterizan las interacciones entre la gobernanza y la participación pública en contextos rurales (Alshenqeeti, 2014). Este enfoque permitirá una comprensión rica y diversa de cómo las políticas regulatorias impactan las vidas de las comunidades rurales y cómo estas comunidades se organizan, participan y responden a esas políticas. A través del análisis de documentos, se va a descubrir significados, valores y procesos sociales para brindar así una comprensión integral de la participación social en las áreas rurales.

Diseño comparativo.

Este modelo fue elegido para comparar múltiples casos o situaciones para identificar factores clave que contribuyen al éxito o fracaso de la gestión y participación comunitaria, proporcionando información valiosa para desarrollar políticas más apropiadas y efectivas, y características de las zonas rurales (Kivunja, 2019). Este enfoque es clave para generar conocimiento práctico que pueda guiar la toma de decisiones y la acción en la gestión rural, promoviendo así una participación comunitaria más activa e inclusiva en procesos que afectan su desarrollo y bienestar.

Modalidad bibliográfica.

Se utilizará el enfoque bibliométrico debido a su capacidad para proporcionar una base teórica sólida y una comprensión profunda del estado actual del conocimiento en el campo (Pérez et al., 2015). Este enfoque permitirá la recopilación, el análisis y la síntesis de una amplia gama de literatura existente,

incluidas investigaciones previas, informes de políticas y estudios de casos, para identificar lagunas en la investigación, tendencias emergentes y mejores prácticas en gobernanza rural y participación pública.

Población y muestra de estudio.

La población de este estudio incluyó individuos y comunidades de todo Ecuador, lo que representa una diversidad de perspectivas y experiencias en todo el país. Este enfoque holístico garantiza que la investigación cubra las numerosas dinámicas sociales, económicas y culturales que están en juego en el país (Hernandez, 2010), lo que permite un análisis más rico y profundo de los temas tratados. Al abordar la población y la muestra desde una perspectiva nacional, este estudio pretende comprender las diferencias regionales y locales en gobernanza y participación pública, brindando una visión integral sobre estas prácticas en diferentes contextos ecuatorianos.

Resultados.

En este apartado se va a analizar cómo la gobernanza influye en la participación de las comunidades rurales en Ecuador. Posterior a ello, se va a realizar un análisis comparativo con otros países de América Latina. Cabe mencionar, que es útil considerar diferentes aspectos de gobernanza de países vecinos como Colombia y Bolivia que tienen contexto socio políticos similares en sus áreas rurales.

Modelo de Gobernanza y Participación.

Los defensores de la gobernanza participativa esperan una variedad de beneficios diferentes de la participación, incluido un mayor interés político, conocimiento y empoderamiento entre los ciudadanos individuales, una mayor inclusión de los participantes, intereses y organizaciones afectados y marginados. Discursos (Cuervo, 2020) de una mejor capacidad de respuesta por parte de los políticos y administradores, y una mayor capacidad colectiva y experiencia para actuar sobre problemas políticos complejos.

Una idea importante es que las innovaciones participativas tienen muchos fundamentos políticos subyacentes diferentes, pero estos principios motivadores, que han sido formulados desde una

perspectiva política, no necesariamente nos dicen por qué los ciudadanos eligen participar en diversos acuerdos de gobernanza participativa en primer lugar.

Hasta donde sabemos, no existe una teoría explícita sobre los motivos de participación en este tipo de procesos. Los teóricos de la gobernanza participativa suelen guardar silencio sobre los motivos de los participantes, y la investigación empírica ha prestado poca atención a la participación desde la perspectiva de los participantes (Becerra et al., 2024); por lo tanto, en esta sección identificaremos y revisaremos brevemente tres nociones importantes de participación sobre gobernanza participativa, y considera tentativamente por qué los países, dadas estas concepciones y beneficios potenciales, podrían optar por participar.

Modelo ecuatoriano.

En Ecuador, el modelo de gobernanza y participación es desatada por su enfoque en la descentralización/ inclusión en especial de las comunidades indígenas y rurales conforme a lo dispuesto en la Constitución del año 2008 (Gil & Acosta, 2020). Dicha normativa fortalece el derecho a participar en la gestión pública a través de consultas populares, consejos consultivos o asambleas locales. Igualmente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece la estructura para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), brindándoles mayores capacidades o responsabilidades para promover la participación ciudadana en el desarrollo local (Ospina et al., 2023).

Un aspecto importante del modelo ecuatoriano es la mayor participación de los pueblos y comunidades indígenas, ya que al crear zonas territoriales especiales, estos grupos pueden ejercer un mayor control sobre su territorio, así como sus recursos, lo que ejerce una forma de autogobierno que refleja sus tradiciones o sus prácticas culturales (Cabello, 2022). Dicho argumento se complementa con políticas que promuevan la inclusión social, lo que a su vez asegura que estos grupos participen en la toma de decisiones que les afecta directamente.

Un ejemplo destacado de este modelo en acción es la experiencia de gobernanza en la comunidad Kichwa de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana. Ya que esta comunidad ha empleado tanto mecanismos legales nacionales como internacionales para proteger sus derechos territoriales y culturales (Torres, 2018). Cabe mencionar, que la resistencia de Sarayaku contra actividades extractivas en su territorio culminó en un triunfo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 que validó sus derechos sobre la tierra, sentando un precedente respecto a la necesidad de obtener un consentimiento previo, libre e informado para proyectos que impacten a las comunidades indígenas (Vargas, 2023). Dicha victoria por parte de la comunidad indígena fortaleció su posición en el Estado, también resaltó la importancia de una participación efectiva y respeto por los derechos de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Modelo de Gobernanza y Participación colombiano.

El modelo de gobernanza y participación colombiano ha ido experimentando transformaciones significativas a lo largo de las últimas décadas, lo que han impulsado en gran medida el proceso de paz, así como la implementación de políticas de descentralización (García & Benítez, 2023). Es así, que la promulgación de la Constitución de 1991 marcó un cambio fundamental, lo que ha establecido un marco político más abierto que valora la diversidad étnica cultural del país.

Dicha nueva constitución ha sido reforzada por las legislaciones subsecuentes que han potenciado a los gobiernos locales/regionales. Entre estas legislaciones se destaca la Ley 136 de 1994 (Zulfa & Septivastuti, 2019), que introdujo varios mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal, incluidos la revocatoria de mandato, los referendos y las consultas populares, lo que a su vez, facilita una mayor implicación de la ciudadanía en la gestión pública.

Un elemento central del modelo de gobernanza en el país colombiano es la prioridad dada a la inclusión de comunidades rurales y grupos étnicos; en particular, estas áreas históricamente afectadas por el conflicto armado (Calvo & Fernández, 2021); por ejemplo, las Juntas de Acción Comunal (JAC) es un

modelo desatacado de organizaciones a nivel comunitarios, ya que facilita la participación activa de los ciudadanos en la administración de sus propios territorios y en la implementación de iniciativas de desarrollo local.

Los acuerdos han impulsado la creación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que son espacios colaborativos donde los excombatientes se integran con las comunidades locales para trabajar conjuntamente en proyectos que promueven el desarrollo y la reintegración social (Basri et al., 2021).

De acuerdo con lo que postula Basri et al. (2021), un caso emblemático del impacto positivo de los modelos gobernanza en Colombia es la participación activa de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de los Cabildos Indígenas, que son estructurados de autoridad tradicional reconocidos legalmente; dichas comunidades administran sus asuntos internos, representando sus intereses ante el Estado. Los Cabildos van desempeñando un papel crucial en la gestión de recursos naturales, colaborando con el gobierno nacional para llevar a cabo proyectos que honran sus tradiciones culturales y ambientales. Dicha sinergia ha sido importante para fortalecer la protección de derechos indígenas fomentando el desarrollo sostenible de sus comunidades (Adesida, 2015).

Modelo de Gobernanza y Participación boliviano.

El modelo del país boliviano ha ido experimentando cambios significativos, debido a la adopción de la su Constitución en el año 2009, lo cual ha establecido que el Estado es plurinacional (Brown & Wocha, 2017). El cambio de Constitución reconoció oficialmente a las 36 naciones indígenas y afrobolivianas, proporcionándoles autonomías y derechos específicos para autogenerarse de acuerdo a sus tradiciones propias. Dicha legislación representa un momento crucial en la evolución política de Bolivia, lo que marca un compromiso formal con la inclusión a la diversidad cultural (Kimengsi & Balgah, 2016); así

mismo, la ley de Descentralización Administrativa y Autonomías ha reforzado el proceso, lo que amplía la autonomía de regios, ciudades y comunidades rurales.

La Autonomía Indígena de Charagua Iyambae, en el departamento de Santa Cruz, es un destacado ejemplo de los modelos de gobernanza implementados en Bolivia. Charagua Iyambae fue una de las primeras áreas en el país en aplicar el estatus de autonomía indígena conforme a la Constitución del año 2009 (Siwi & Indriyati, 2019). Lo que habilitó a la Comunidad a autoadministrar sus asuntos políticos y sociales, gestionar de manera sostenible sus recursos naturales, diseñando políticas educativas y de salud que respeten su idioma y tradiciones culturales.

Desafíos para la participación activa.

Ecuador.

Un desafío clave para la participación efectiva en las comunidades rurales de Ecuador, de acuerdo con el postulado por Hasan & Muhammad (2024) es la escasez de recursos educativos y tecnológicos, fundamentales para una participación activa y bien informada en la gobernanza. Pese al progreso en las políticas de descentralización, aún existen muchas comunidades rurales que enfrentan barreras significativas en el acceso a la información y las herramientas necesarias para una participación completa en los procesos de decisión; así mismo, la falta de infraestructura, como son los caminos adecuados y servicios de telecomunicaciones, junto con la insuficiencia de programas de capacitación en derechos civiles y procesos administrativos, limita la capacidad de los ciudadanos en estas áreas para participar en las decisiones que impactan directamente en su vida cotidiana y en su entorno tal como lo menciona Masharipov (2023).

Un desafío considerable en la participación efectiva en las comunidades rurales de Ecuador radica en asegurar que todas las voces, especialmente las de grupos marginados como mujeres, jóvenes e indígenas, sean adecuadamente representadas tal como menciona Dinatul & Azizatul (2022); es así, que autores como Vasstrom & Normann, (2019) manifiestan que las estructuras de poder tradicionales y las

normas culturales a menudo pueden marginar a estos grupos, limitando su participación activa en los procesos de toma de decisiones. Dicha exclusión puede disminuir la efectividad de una gobernanza verdaderamente participativa. Adicionalmente, las dinámicas de género y etnicidad introducen complejidades adicionales, ya que dichos grupos pueden enfrentar discriminación y un reconocimiento insuficiente de sus necesidades y aportes específicos.

Colombia.

En Colombia, la seguridad de los líderes y activistas comunitarios es un desafío importante para la participación efectiva en comunidades rurales y áreas previamente afectadas por conflictos armados. Dedicados a proteger los derechos humanos y gestionar los recursos locales, estos líderes a menudo enfrentan amenazas y actos de violencia (Nurkomala et al., 2023). Este clima de intimidación y miedo socava los esfuerzos efectivos de descentralización y la participación comunitaria genuina, limitando la capacidad de muchos líderes y ciudadanos de participar activamente en decisiones y proyectos que impactan a sus comunidades.

La falta de protección adecuada para estos defensores de derechos humanos complica aún más la implementación de políticas dirigidas a la inclusión social y la participación cívica, que son elementos fundamentales del movimiento por una paz duradera y el fortalecimiento de la democracia del país (Nahar & Khurana, 2020).

En muchas comunidades rurales de Colombia, la infraestructura deficiente y el acceso limitado a los servicios básicos constituyen obstáculos importantes para una participación efectiva. La falta de una conectividad adecuada, tanto en términos de transporte como de telecomunicaciones, limita gravemente el acceso a información vital y reduce la capacidad de los ciudadanos para participar activamente en el diálogo político y la toma de decisiones.

La situación se ve agravada por la falta de programas de educación y formación que permitan a la gente participar plenamente en los procesos democráticos y de desarrollo (Vasstrom & Normann, 2019). Estas

limitaciones estructurales son importantes y deben abordarse con urgencia para promover una participación real y garantizar que las voces de todos los sectores sean incluidas para fortalecer una nación inclusiva y más justa.

Bolivia.

En Bolivia, el principal desafío para la participación comunitaria rural efectiva es armonizar las estructuras de gobernanza indígenas tradicionales con las estructuras de gobernanza modernas. Aunque la constitución boliviana garantiza la autonomía y los derechos indígenas, los conflictos entre las leyes locales y nacionales a menudo crean complicaciones legales y administrativas (Espinosa, 2023). Estas diferencias pueden generar conflictos de autoridad y ambigüedad en la aplicación de la ley, limitando así la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

De acuerdo con Guerrero et al. (2023), en Bolivia, el principal desafío para la participación comunitaria rural efectiva es armonizar las estructuras de gobernanza indígenas tradicionales con las estructuras de gobernanza modernas. Aunque la constitución boliviana garantiza la autonomía y los derechos indígenas, los conflictos entre las leyes locales y nacionales a menudo crean complicaciones legales y administrativas. Cabe mencionar, que estas diferencias pueden generar conflictos de autoridad y ambigüedad en la aplicación de la ley, limitando así la participación de la comunidad en la toma de decisiones; además, las barreras geográficas y culturales entre las comunidades indígenas y las grandes áreas urbanas obstaculizan la comunicación fluida y el entendimiento necesarios para una cooperación efectiva tal como lo corrobora Nurkomala et al. (2023).

Comparativa de los tres países: Ecuador, Colombia, Bolivia.

Ante lo expuesto anteriormente, se pudo evidenciar, que en el área de gobernanza y participación comunitaria en comunidades rurales, los enfoques de Ecuador, Colombia y Bolivia se han caracterizado por contextos políticos y sociales específicos. Se pudo evidenciar, que el país ecuatoriano ha trabajado para fortalecer la descentralización y aumentar la participación ciudadana a través de gobiernos

autónomos descentralizados, también conocidos por las siglas (GAD) para involucrar mejor a las comunidades rurales en las decisiones políticas y el desarrollo local (García & García, 2021); no obstante, han enfrentado importantes desafíos de infraestructura y capacitación que limitan la participación efectiva de estas comunidades.

El país colombiano ha intentado integrar las zonas rurales afectadas por el conflicto armado en el proceso de la paz que ha sido implementado recientemente; por tal razón, el país ha centrado su atención en los denominados ‘líderes comunitarios’, aunque esto ha traído consigo dificultades en la práctica y en el uso de mecanismos de participación en zonas remotas, según lo menciona Guarnizo & Riveros (2024).

Bolivia, por el contrario, ha surgido como un ejemplo notable de multinacionalismo al reconocer los derechos de autonomía de sus pueblos indígenas e institucionalizar la gobernanza basada en principios legales dentro de sus sistemas legislativos. Según Becerra et al. (2024), este enfoque ha llevado a una mayor participación directa de las comunidades indígenas en la gestión de recursos y los asuntos políticos, a pesar de tensiones ocasionales en torno a la compatibilidad entre el derecho comunitario y las normas internacionales.

Esta comparación ha demostrado, en general, que si bien Ecuador, Colombia y Bolivia han registrado logros notables en cuanto a la participación de las comunidades rurales en la gobernanza, cada uno de estos países enfrenta problemas únicos debido a antecedentes políticos, sociales y culturales específicos, por lo que los resultados en materia de efectividad son diferentes de participación pública entre las comunidades rurales (Ospina et al., 2023).

Estrategias para mejorar la participación social de las comunidades rurales en Ecuador.

El diseño de estrategias para mejorar la participación social de las comunidades rurales en Ecuador es importante, ya que el país se ha visto atravesado por desafíos estructurales y disparidades que enfrentan las comunidades, en especial, en términos de acceso a servicios, recursos y oportunidades de participación en la toma de decisiones (Torres, 2018). Cabe mencionar, que al fortalecer su participación,

se fomenta una gobernanza mucho más representativa, y sobre todo, inclusiva lo que conduce a políticas efectivas.

Tabla 1. Estrategia 1 – Diagnóstico participativo.

<p>Diagnóstico participativo y mapeo de actores</p>	<p>Objetivo. Realizar un diagnóstico participativo para identificar las necesidades, barreras y oportunidades específicas de las comunidades rurales en cuanto a la participación en la gobernanza.</p> <p>Acciones preparatorias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selección de comunidades rurales representativas para el estudio. • Formación de un equipo de trabajo multidisciplinario que incluya sociólogos, antropólogos, expertos en desarrollo rural y facilitadores comunitarios. • Desarrollo de un cronograma detallado para la realización de talleres y asambleas comunitarias.
<p>Implementación de talleres y asambleas comunitarias</p>	<p>Objetivo específico. Recolectar información directa de los habitantes sobre sus experiencias y percepciones actuales respecto a la actual gobernanza.</p> <p>Acciones preparatorias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar series de talleres y asambleas en diversas localidades, asegurando la participación amplia de diferentes sectores de la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes, ancianos y líderes locales. • Utilizar metodologías participativas como grupos focales, entrevistas semiestructuradas y encuestas para recoger datos cualitativos/cuantitativos. • Facilitar espacios de diálogo donde los participantes puedan expresar libremente sus opiniones, preocupaciones y sugerencias.
<p>Mapeo de actores clave</p>	<p>Objetivo específico. Identificar a los actores clave, tanto formales como informales que influyen en la gobernanza local y en la toma de decisiones.</p> <p>Acciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un mapa de actores que influya organizaciones gubernamentales, ONGs, líderes comunitarios, empresas locales y grupos de interés. • Analizar las redes de influencia y las relaciones de poder dentro de las comunidades. • Identificar aliados potenciales y obstáculos para la implementación de futuras intervenciones de desarrollo.
<p>Análisis y planificación basada en los resultados</p>	<p>Objetivo específico. Utilizar información y los insights obtenidos para planificar intervenciones estratégicas que mejoren la participación en la gobernanza.</p>

	<p>Acciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sintetizar los resultados de los talleres, asambleas y mapeo de actores para la identificación de temas clave y establecer prioridades. • Desarrollar un plan de acción que aborde las necesidades específicas identificadas, diseñando programas que fortalezcan la capacidad de gobernanza local y participación comunitaria. • Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las intervenciones.
--	--

Tabla 2. Estrategia 2 – Infraestructura y tecnología.

Evaluación de necesidades y planificación	<p>Objetivo: Identificar las deficiencias específicas de infraestructura y tecnología en las comunidades rurales.</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar diagnósticos locales para evaluar el estado actual de las carreteras, puentes, conectividad de internet y accesibilidad general. • Consultar con las comunidades para entender sus necesidades específicas y prioridades en cuanto a infraestructura y tecnología. • Desarrollar un plan estratégico que incluya proyectos de mejora de caminos y ampliación de la cobertura de telecomunicaciones, priorizando las áreas con mayores limitaciones.
Implementación de Mejoras de Infraestructura	<p>Objetivo: Mejorar la accesibilidad física y la conectividad en las comunidades rurales.</p> <p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invertir en la construcción y mantenimiento de caminos que conecten las comunidades rurales con los centros urbanos más cercanos, facilitando el acceso a servicios y oportunidades. • Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo la instalación de torres de telefonía móvil y la expansión de la banda ancha para garantizar una conexión a internet estable y rápida. • Coordinar con autoridades locales y nacionales para asegurar la financiación y ejecución efectiva de estos proyectos.
Implementación de Tecnologías de la Información	<p>Objetivo: Facilitar la participación remota y mejorar las capacidades de comunicación de las comunidades rurales</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveer a las comunidades rurales de dispositivos tecnológicos y software adecuado para participar en reuniones virtuales y tomar decisiones importantes de manera remota. • Capacitar a los residentes en el uso de tecnologías de la información, asegurando que puedan manejar eficazmente las herramientas proporcionadas para una participación activa. • Establecer centros comunitarios equipados con la tecnología necesaria para facilitar el acceso colectivo a recursos digitales y plataformas de comunicación.

Evaluación y Ajuste	<p>Objetivo: Monitorear la efectividad de las mejoras en infraestructura y tecnología y ajustar las estrategias según sea necesario.</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar un sistema de seguimiento para evaluar el impacto de las mejoras en la participación comunitaria y en la calidad de vida de las comunidades rurales. • Recoger feedback de los usuarios para entender la eficacia de las intervenciones tecnológicas y de infraestructura. • Ajustar y optimizar los proyectos en función de los resultados y las necesidades emergentes para asegurar una mejora continua.
----------------------------	---

Nota: Elaboración propia.

El diseño de esta estrategia tiene como finalidad superar las barreras físicas y tecnológicas que en la actualidad son limitantes para una correcta participación de las comunidades rurales en el Ecuador; por tal razón, busca garantizar una integración más efectiva de estos sectores en el proceso de toma de decisiones, y sobre todo, en el desarrollo socioeconómico del país (Vargas, 2023).

Discusión.

Una discusión profunda sobre el impacto de la gobernanza en la participación social de las comunidades rurales en Ecuador destaca algunos de los desafíos y oportunidades clave para el desarrollo sostenible y la inclusión social. Según Guarnizo & Riveros (2024), la falta de recursos educativos y tecnológicos es la principal barrera que limita la participación efectiva de las comunidades rurales en el proceso de gestión. Esta limitación resalta la necesidad de políticas que no sólo mejoren el acceso a la educación y la tecnología, sino que también adapten estos recursos a las necesidades específicas y los contextos culturales de las comunidades rurales

En contraste, la otra cara de la moneda, según Gil & Acosta (2020), afirman la necesidad de que en la gobernanza participativa se escuche la voz de todos, particularmente las voces de grupos marginados como las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. En la mayoría de las zonas rurales del Ecuador, estos grupos suelen estar excluidos de los procesos de toma de decisiones, debido a las estructuras de poder y las normas culturales prevalecientes. Esto significa, que se necesita una participación efectiva,

no sólo en políticas que promuevan la participación equitativa sino también en las dinámicas de poder y las culturas políticas locales, para lograr una verdadera democracia en el proceso de toma de decisiones. En comparación con Colombia y Bolivia, los problemas de Ecuador son similares, pero de naturaleza diferente y requieren un enfoque personalizado; por ejemplo, Espinosa (2023) enfatiza que en Colombia la principal preocupación es la seguridad de los líderes y activistas comunitarios, mientras que en Bolivia, la integración de las estructuras tradicionales de gobernanza indígena con los sistemas de gobernanza modernos crea complejidad jurídica y administrativa. Estas diferencias resaltan la importancia de desarrollar estrategias de gobernanza y participación que sean culturalmente apropiadas y apropiadas para cada contexto nacional y local.

Las teorías de gobernanza participativa respaldadas por algunos autores como Nurkomala et al. (2023) puede mejorar de manera significativa la calidad de las decisiones gubernamentales, incrementando la legitimidad y cumpliendo con expectativas de la justicia democrática; dichos conceptos postulados por distintos teóricos han subrayado la importancia intrínseca de los beneficios potenciales de involucrar a las comunidades en el proceso de toma de decisiones; no obstante, la aplicación práctica de estas teorías ha ido enfrentando obstáculos significativos, tales como barreras estructurales, resistencia cultural o institucional al cambio, atenuando la eficacia de las políticas de participación.

CONCLUSIONES.

Los desafíos identificados, como la falta de infraestructura y recursos educativos y tecnológicos, así como barreras estructurales como las normas culturales y el acceso limitado a la toma de decisiones, ilustran la dificultad de implementar una gobernanza verdaderamente inclusiva; sin embargo, estos mismos desafíos resaltan oportunidades para implementar estrategias innovadoras que aborden estas limitaciones. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica, la educación y la capacitación adaptadas a las necesidades de las comunidades rurales y crear mecanismos de participación eficaces y accesibles son pasos importantes para mejorar la gobernanza.

En conclusión, la gobernanza ha tenido un impacto profundo en la influencia de la participación social de las comunidades indígenas o rurales, a través de la implementación de políticas inclusivas o participativas, por lo que se pueden cambiar las dinámicas de poder mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.

Para abordar eficazmente estos desafíos, es importante no solo identificar y comprender las barreras a la participación, sino también diseñar e implementar políticas resilientes, flexibles y sostenibles en el largo plazo. Esto incluye construir infraestructura física y tecnológica, fortalecer la educación y la capacidad de liderazgo local, y garantizar que los procesos participativos sean verdaderamente inclusivos. La acogida de estas estrategias o planificaciones va a permitir que el país ecuatoriano, y en general a otros países que enfrentan desafíos similares, sigan avanzando hacia una gobernanza más eficaz e inclusiva que pueda apoyar el desarrollo económico y social de una manera justa y sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Adesida, O. (2015). Effects of Community Participation on the Sustainability of Rural Infrastructure in Ondo State, Nigeria. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2015/15756>
2. Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review. *English Linguistics Research*, 3(1), 39–45. <https://doi.org/10.5430/elr.v3n1p39>
3. Barón, G., Montaña, Á., Gonzalez, C., & Rios, C. (2019). Structural characterization of post-consumption sludge as aggregates in construction materials. *Revista Perspectivas*, 24(1), 16–21. <https://doi.org/10.22463/0122820x.1793>
4. Basri, Y., Findayani, T., & Zarefar, A. (2021). Implementation of good governance to improve the performance of village governments. *Journal Akuntansi*, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>

5. Becerra, D., Acosta, C., & Leyton, J. (2024). Gestión del recurso hídrico en la ruralidad, mediante estrategias de fortalecimiento comunitario. *Entramado*, 20(11), 1–16. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.10054>
6. Brown, I., & Wocha, C. (2017). Community Participation: Panacea for Rural Development Programmes in Rivers State, Nigeria. *Asian Journal of Environment & Ecology*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.9734/ajee/2017/34076>
7. Cabello, S. (2022). Gobernanza y políticas públicas contra la despoblación rural a través del caso de La Rioja (España). *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, 4(17), 245–274. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0009>
8. Calvo, P., & Fernández, J. (2021). Dialogue, participation and social innovation initiatives for improving territorial governance in rural environments. *Ciudades Revista*, 4(24), 45–64. <https://doi.org/10.24197/ciudades.24.2021.45-64>
9. Cuervo, L. (2020). Planificación multiescalar, regional y local (Vol. 90). www.cepal.org/apps
10. Dinatul, A., & Azizatul, F. (2022). Community Participation in Improving Health in Remote Areas: a Literature Review. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 6(2), 27–43.
11. Espinosa, N. (2023). Gobernanza ambiental sin soberanía: postconflicto, violencia y la conservación siempre aplazada de la Sierra de La Macarena. *La Revista El Ágora USB*, 23(2), 375–398. <https://doi.org/10.21500/16578031.6733>
12. García, M., & Benítez, M. (2023). El turismo como herramienta para construir gobernanza ambiental en el geoparque Comarca Minera. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 21(1), 23–36. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2023.21.002>
13. García, R., & García, A. (2021). La participación social y ciudadana en México en el contexto actual. *Gestión y Estrategia*, 4(5), 27–42.

14. Gil, J., & Acosta, N. (2020). Participación social para la construcción de un modelo integral en salud con poblaciones rurales. *Revista Ciencias Sociales*, 4(5), 1–13.
15. Guarnizo, A., & Riveros, C. (2024). Rurality and Community Governance, in the Context of New Ruralities. *Territorios*, 4(50), 2–22. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12236>
16. Guerrero, A., Gómez, A., Borda, A., & Rincón, J. (2023). Paz ambiental y gobernanza: retos para disminuir el cambio climático y la afectación del páramo “la cortadera”, Boyacá, Colombia. *La Revista El Ágora USB*. <https://doi.org/10.21500/16578031.6735>
17. Hasan, K., & Muhammad, M. (2024). Village Government Strategies to Enhance Community Participation In Development: A Case Study in Garessi Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 4(1), 188–202. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v4i1.233>
18. Kimengsi, J., & Balgah, R. (2016). Enhancing Community Participation for Rural Development in Central Ejagham of Cameroon: Challenges and Prospects. *International Journal of Community Development*, 4(1), 21–34. <https://doi.org/10.11634/233028791604745>
19. Kivunja, C. (2019). Innovative Methodologies for 21st Century Learning, Teaching and Assessment: A Convenience Sampling Investigation into the Use of social media Technologies in Higher Education. *International Journal of Higher Education*, 4(2), 1–26. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v4n2p1>
20. Lucky, O. (2022). Significance of community participation in rural development. *International Journal of Agriculture and Earth Science*, 2(2), 44–54. www.iiardpub.org

21. Masharipov, I. (2023). Governing bodies in the development of civil society: problems and solutions. *EJBSOS European Journal of Business Startups and Open Society* |, 3(6), 2795–9228. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7145718>
22. Nahar, K., & Khurana, D. (2020). Corporate Social Responsibility. *National Education Policy 2020: Challenges & Prospects in Academia & Industry*, 4(5), 724–732. www.vidhyayanaejournal.org
23. Nurkomala, N., Diswandi, D., & Fadliyanti, L. (2023). The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development. *European Journal of Development Studies*, 3(3), 76–82. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268>
24. Ospina, M., Matiz, E., & Báez, A. (2023). Nueva ruralidad y política pública en Latinoamérica. *Bitacora Urbano Territorial*, 33(2), 225–240. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n2.105816>
25. Patyka, N., Sokolova, A., Movchaniuk, A., Sysoieva, I., & Khirivskyi, R. (2021). Ukraine’s rural areas in the conditions of decentralization and local self-government reform: challenges and prospects. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 9(3), 266–296. <http://are-journal.com>
26. Pérez, M., Ocampo, F., & Sánchez, K. (2015). Aplicación de la metodología de la investigación. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*, 6(11), 796. <https://doi.org/10.23913/ride.v6i11.130>
27. Hernandez Sampieri, R. (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill., 4(1), 1–379. https://www.academia.edu/6399195/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri
28. Siwi, N., & Indriyati, S. (2019). Potential of Social Capital and Community Participation in Village Development. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(1), 68–85. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18825>

29. Torres, G. (2018). Gestión y gobernanza territorial. Los Sistemas Agroalimentarios Localizados en la encrucijada del desarrollo territorial. *Revar*, 5(4), 61–79.
30. Vargas, A. (2023). La Participación Social: Resignificación Y Construcción Multidimensional Del Desarrollo Con Enfoque Territorial En San Carlos, Colombia. *Revista Pares - Ciencias Sociales*, 5(4), 143–162.
31. Vasstrom, M., & Normann, R. (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. *Local Government Studies*, 45(6), 848–868. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1590200>
32. Zulfa, K., & Septiviasuti, U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in ponorogo regency. *Ekulilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(4), 31–44.

DATOS DE LOS AUTORES.

1. **Arhon Joel Onofre Arboleda.** Abogado, Universidad Bolivariana del Ecuador. Estudia la Maestría en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Correo electrónico: ajonofrea@ube.edu.ec <https://orcid.org/0009-0003-1828-2501>.
2. **Dayse Margarita Perero Morales.** Abogada, Universidad Bolivariana del Ecuador. Estudia la Maestría en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Correo electrónico: dmpererom@ube.edu.ec <https://orcid.org/0009-0003-8941-6802>.
3. **María José Alvear Calderón.** Magister en Derecho Constitucional, Universidad Bolivariana del Ecuador, Docente investigadora. Correo electrónico: mjalvearc@ube.edu.ec <https://orcid.org/0009-0008-5084-2990>.

RECIBIDO: 10 de septiembre del 2024.

APROBADO: 6 de octubre del 2024.